



Asamblea General

Distr. general
27 de julio de 2009
Español
Original: inglés

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 42º período de sesiones

Acta resumida de la 891ª sesión

Celebrada en el Centro Internacional de Viena, Viena, el jueves 2 de julio de 2009, a las 9.30 horas.

Presidente: Sr. Soogeun Oh (República de Corea)

Índice

Proyecto de ley modelo de la CNUDMI sobre la contratación pública

La presente acta está sujeta a correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo y presentarse en forma de memorando. Además, deberán incorporarse en un ejemplar del acta. Las correcciones deberán enviarse, *dentro del plazo de una semana a contar desde la fecha de distribución del presente documento*, al Jefe del Servicio de Gestión de Conferencias, oficina D0771, Centro Internacional de Viena.

Las correcciones que se introduzcan en las actas del presente período de sesiones se publicarán en un solo documento de corrección poco después de finalizar el período de sesiones.

V.09-85155 (S)



Se declara abierta la sesión a las 10.15 horas.

Proyecto de ley modelo de la CNUDMI sobre la contratación pública (A/CN.9/664, 668 y 672; A/CN.9/WG.I/WP.68 y Add.1; A/CN.9/WG.I/WP.69 y Add.1-5; A/CN.9/XLII/CRP.2 y A/CN.9/WG.I/XV/CRP.2)

1. **El Presidente** invita a la Secretaría a que repase la labor realizada por el Grupo de Trabajo I (Contratación Pública) sobre la actualización de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios (la Ley Modelo) desde su 37º período de sesiones, celebrado en 2004.

2. La **Sra. Nicholas** (Secretaría) dice que el mandato del Grupo de Trabajo es actualizar la Ley Modelo para que en ella se reflejen nuevas prácticas, en particular las resultantes del uso de las comunicaciones electrónicas en la contratación pública, y la experiencia adquirida al utilizar la Ley Modelo como base de reformas legislativas. Un aspecto importante del mandato es el hecho de que la revisión no debe apartarse de los principios básicos de la Ley Modelo. Se está presentando a la Comisión en su período de sesiones en curso un proyecto de texto revisado de la Ley Modelo (A/CN.9/WG.I/WP.69 y Add.1 a 5).

3. Tras la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en diciembre de 2005, la Comisión pidió al Grupo de Trabajo que examinara la coherencia entre la Ley Modelo y las disposiciones de la Convención. En concreto, le pidió que estudiara la cuestión de los conflictos de interés y las declaraciones de interés, que no se habían abordado en la Ley Modelo. El Grupo de Trabajo también examinó en sus deliberaciones las contrataciones en el sector de la defensa y el amplio uso de criterios socioeconómicos en la contratación. Si bien se establecieron los parámetros principales de la mayor parte de las cuestiones, algunos aspectos se deben seguir examinando.

4. El Grupo de Trabajo empezó a estudiar posibles revisiones de la Ley Modelo en su sexto período de sesiones, celebrado el 30 de agosto de 2004, y continuó esa labor en los diez períodos de sesiones siguientes. En los primeros períodos de sesiones la labor se centró en tres temas clave respecto de los cuales el Grupo de Trabajo recomendó disposiciones totalmente nuevas o modificaciones importantes: la utilización de las comunicaciones electrónicas en la contratación

pública, las subastas electrónicas inversas y los acuerdos marco. Si bien el Grupo de Trabajo convino en principio en la mayoría de esas disposiciones, quedaban pendientes algunas cuestiones de redacción. En posteriores períodos de sesiones, el Grupo de Trabajo se centró en la contratación de servicios, en otros posibles métodos de contratación y en la simplificación y normalización de la Ley Modelo, y se estaban estudiando disposiciones nuevas y modificaciones sustanciales.

5. La oradora propone que se examinen los avances realizados en las diversas cuestiones determinadas por el Grupo de Trabajo, empezando por las comunicaciones electrónicas. El Grupo de Trabajo recomendó nuevas disposiciones para permitir la utilización de comunicaciones electrónicas en el proceso de contratación, concretamente en un nuevo artículo 8 del proyecto de Ley Modelo revisada, que trataría a la vez la forma de esas comunicaciones y los medios para realizarlas, y que sustituiría al artículo 9 de la Ley Modelo de 1994 en que se regulaba únicamente la forma de las comunicaciones. El artículo 8 se redactó para esclarecer qué formas y medios de comunicaciones podrían utilizarse. En él no se distinguía entre las comunicaciones con soporte de papel y las electrónicas y no se hacía referencia a ningún medio en concreto. Todos los medios de comunicación se regirían por la equivalencia funcional. De ahí que la información deba estar en una forma que deje constancia de su contenido y sea accesible para su ulterior consulta. Es decir, tal vez sea necesario que las comunicaciones se consignen por escrito, pero no se indica si ese “por escrito” debe ser en papel o en pantalla. En el proyecto de artículo 8 se permite la licitación electrónica, y además, se garantiza la igualdad entre las convocatorias de licitación publicadas por medios electrónicos y las publicadas por medios tradicionales.

6. Para abordar posibles reservas respecto al uso de técnicas de comercio electrónico, se han incluido salvaguardias acerca de la confidencialidad, la posibilidad de localización y la integridad. Y, lo que es más importante, en el proyecto de Ley Modelo revisada, las normas que anteriormente se aplicaban a las comunicaciones con soporte de papel son igualmente aplicables a las comunicaciones electrónicas. En particular, ningún medio o forma de comunicación deberá utilizarse para restringir el acceso a la contratación. Las disposiciones también garantizan la transparencia y la previsibilidad exigiendo que la

entidad adjudicadora, al principio del proceso de contratación, especifique cualquier requisito concreto sobre la forma y los medios de las comunicaciones que habrán de utilizarse.

7. Las subastas electrónicas inversas suponen la competencia en línea y en tiempo real entre la entidad adjudicadora y varios proveedores. El término “inversa” indica que los proveedores ofrecen precios cada vez más bajos para obtener el contrato de la entidad adjudicadora. Dadas las enormes ventajas potenciales en términos de ahorro en los precios, el Grupo de Trabajo recomienda que las subastas electrónicas inversas se regulen en el proyecto de Ley Modelo revisada. Las subastas no electrónicas, en cambio, presentan riesgos de colusión. La utilización de subastas electrónicas inversas estaría sujeta a ciertas condiciones, y se aplicarían reglas procesales tanto para las subastas que constituyen una etapa en otros métodos de contratación como para las que constituyen un método de contratación por sí solas. Las recomendaciones del Grupo de Trabajo son aplicables únicamente al tipo de subasta en que, al final del proceso de subasta, se determina automáticamente la mejor oferta en función de los criterios de adjudicación. Se considera que otros tipos de subasta que requieren una evaluación posterior entrañan riesgos inaceptables. Así, se exige que el sistema mediante el cual se efectúa la subasta electrónica inversa permita hacer una reevaluación automática de las ofertas a medida que se van revisando durante la subasta, de modo que los licitantes sepan en todo momento si su oferta es la ganadora o no. En cuanto a los factores distintos del precio, el Grupo de Trabajo ha concluido que podrían complicar el proceso, reflejar peor los costos y mermar la transparencia.

8. Ciertos estudios sobre subastas electrónicas inversas han demostrado que pueden inducir a ofertas a precios insosteniblemente bajos, lo que conlleva un riesgo para la ejecución del proyecto en cuestión. No obstante, el Grupo de Trabajo ha concluido que ese riesgo puede aparecer en cualquier procedimiento de contratación y probablemente no es mayor en las subastas electrónicas inversas que en cualquier otro procedimiento, como mínimo a largo plazo. Por tanto, recomienda que en el proyecto de Ley Modelo revisada se incluyan disposiciones para requerir a la entidad adjudicadora que estudie el riesgo de una oferta anormalmente baja, tanto al evaluar la oferta como al examinar las cualificaciones de los proveedores. Sólo si ha habido una investigación de esa índole, y la entidad licitadora ha concluido que la oferta es anormalmente baja y que ello supone un riesgo para la ejecución, podría la entidad licitadora rechazar la oferta por ese motivo. Se trata de una excepción muy limitada y rigurosa del principio general según el cual las ofertas individuales u otras ofertas no pueden

rechazarse por el riesgo de corrupción que dicho rechazo podría suponer.

9. El Grupo de Trabajo también ha examinado a fondo los acuerdos marco. Son contrataciones en dos etapas: en la primera, uno o más proveedores celebran un acuerdo marco con la entidad adjudicadora, y en la segunda, celebran contratos adjudicados en forma de pedidos. Los acuerdos marco no se regularon en la Ley Modelo de 1994, pero actualmente se utilizan con mucha frecuencia en la práctica y tienen varias ventajas, entre otras, menores gastos administrativos y de operaciones, reducción de los tiempos de operación (porque ciertas etapas del proceso de contratación se realizan una sola vez para lo que, de otro modo, se necesitaría una serie de contrataciones), y la seguridad del suministro.

10. El Grupo de Trabajo recomienda que en el proyecto de Ley Modelo revisada se incluyan disposiciones relativas a tres tipos de acuerdos marco. El primero es un acuerdo marco “cerrado” en el que se fijan las especificaciones y todos los requisitos de la contratación en el acuerdo marco, sin que se abra un nuevo proceso competitivo entre los proveedores en la segunda etapa. Puede concertarse con uno o más proveedores. El segundo es un acuerdo marco también “cerrado” en el que se fijan las especificaciones y los principales requisitos de la contratación pero que incluye un nuevo proceso competitivo entre los proveedores que son parte en el acuerdo marco antes de adjudicar los contratos. Siempre se celebra con varios proveedores. El tercero es un acuerdo marco “abierto”, es decir, un acuerdo concertado con más de un proveedor que incluye una segunda etapa en la que compiten todos los proveedores que son parte en el acuerdo. Está previsto que el acuerdo marco abierto se ejecute por vía electrónica y se utilice para contrataciones simples. Al igual que con las subastas electrónicas inversas, los acuerdos marco estarían sujetos a condiciones generales, y para cada tipo se deberían seguir procedimientos específicos. A ese respecto quedan por resolver algunas cuestiones.

11. Los acuerdos marco presentan ciertos riesgos, sobre todo los concertados entre un grupo específico de proveedores y la entidad adjudicadora. Dado que durante el período de vigencia del acuerdo el mercado, de hecho, estaría cerrado, la competencia eficaz podría verse perjudicada. También existe un cierto riesgo de colusión entre proveedores durante la vigencia de un acuerdo marco, y podría ser difícil garantizar la supervisión eficaz de los acuerdos. Por ello el Grupo de Trabajo recomienda que se exija a los Estados que impongan una duración máxima a los acuerdos cerrados, a fin de que no se utilicen para excluir a proveedores del proceso competitivo durante largos períodos. El Grupo de Trabajo también ha prestado

mucha atención a la necesidad de asegurar la transparencia requiriendo que se emitan una serie de avisos públicos a lo largo del proceso.

12. Una alternativa a los acuerdos marco son las listas de proveedores. En principio, el Grupo de Trabajo convino en que, tanto si se las consideraba compatibles con los principios básicos, los propósitos y los objetivos de la Ley Modelo como si no, esas listas se utilizaban en la práctica y por tanto su administración debería estar sujeta a unos requisitos mínimos. Sin embargo, más tarde el Grupo de Trabajo llegó a la conclusión de que no hacía falta abordar ese tema en el proyecto de Ley Modelo revisada porque las disposiciones flexibles que siguen los acuerdos marco (en particular, las relativas a los acuerdos marco abiertos) bastarían para tener en cuenta los supuestos beneficios de las listas de proveedores y eliminarían algunos de los riesgos que planteaban. Dado que ese punto no goza de aceptación universal entre los expertos en contratación, las razones por las que el Grupo de Trabajo llegó a esa conclusión se especificarán con más detalle en la Guía para la incorporación al derecho interno, en la que también se plantearán las reservas bien documentadas que suscitan las listas, por ejemplo, su utilización de manera no transparente y a veces inadecuada para restringir el acceso al mercado, incluso cuando se establecen controles como, por ejemplo, listas permanentemente abiertas y procedimientos de inscripción sencillos, e incluso en el caso de que se quiera dar a las listas un carácter facultativo.

13. El Grupo de Trabajo acordó en su sexto período de sesiones que el proyecto de Ley Modelo revisada debería mantener las diversas opciones para la contratación de servicios, pero que la Guía para la incorporación al derecho interno debía ser menos restrictiva al abordar los tipos de servicios y las circunstancias pertinentes en que debían utilizarse los diferentes métodos. El Grupo de Trabajo también convino en volver a examinar la utilización de los métodos alternativos de contratación, las condiciones por las que se regiría su uso y la cuestión de si debía mantenerse todo el conjunto de métodos. Por consiguiente, una revisión global de esos métodos de contratación pasó a ser un elemento primordial del ejercicio de simplificación y normalización.

14. El Grupo de Trabajo observó un cierto solapamiento entre dos de los procedimientos de selección de servicios y el procedimiento de solicitud de propuestas que figuran en la Ley Modelo. Además, todos los procedimientos que pueden utilizarse para bienes y obras también pueden utilizarse para servicios, de modo que tal vez fueran innecesarias unas disposiciones distintas. Las características comunes son: la posibilidad de una convocatoria abierta a

licitación que empiece con un anuncio público o una convocatoria directa que empiece por los proveedores; se presentan propuestas frente a un único conjunto de especificaciones que no puede modificarse; los criterios de evaluación pueden hacer referencia a las competencias directiva y técnica relativas del proveedor o contratista, y el precio se considera por separado y tras haber completado la evaluación técnica. El único procedimiento que es distinto de los demás en la Ley Modelo es el procedimiento de selección de servicios con negociaciones consecutivas.

15. En consecuencia, algunas delegaciones propusieron un único método de contratación negociada aplicable a cualquier tipo de contratación, llamada “solicitud de propuestas con diálogo competitivo”, que el Grupo de Trabajo examinó en detalle en sus períodos de sesiones 15º y 16º. El resultado de ese examen se presentó a la Comisión como nuevo método de contratación en el documento A/CN.9/XLII/CRP.2. Las principales dificultades de la contratación negociada son: lograr un equilibrio entre la discrecionalidad o flexibilidad (cuya finalidad sería lograr el mejor rendimiento del dinero) y los procedimientos regulados para evitar que se abuse del poder discrecional concedido; garantizar una transparencia suficiente (revelar las reglas del juego por adelantado) dejando al mismo tiempo margen para la negociación, y dar a la entidad adjudicadora cierto control sobre el número de proveedores con los que negocia. Ese último objetivo podría lograrse mediante una precalificación, una preselección, una evaluación de la conformidad de las ofertas o la exclusión de soluciones técnicas. Otra cuestión es la relativa a qué aspectos de la posible contratación han de negociarse durante la fase de diálogo.

16. Si bien los proponentes del método de la contratación negociada había previsto que ésta sustituyera a otros métodos que incluían negociaciones, algunas delegaciones se mostraron partidarias de mantener los demás métodos (incluidas las negociaciones competitivas, la licitación en dos etapas y tal vez las negociaciones consecutivas) en determinadas circunstancias, como en una contratación urgente tras un desastre. Puesto que la introducción de más métodos de contratación era contraria al principio de simplificación y normalización, el Grupo de Trabajo decidió que fuera la Comisión quien decidiera qué métodos debían mantenerse.

17. Se han vuelto a examinar las condiciones por las que se rige el uso de métodos alternativos. En el texto de 1994 la licitación en dos etapas, la solicitud de propuestas y la negociación competitiva podían utilizarse en las mismas condiciones. La licitación restringida o la convocatoria directa en el caso de los servicios podían utilizarse cuando los bienes, las obras

o los servicios podían obtenerse únicamente de un número limitado de proveedores o contratistas. Las disposiciones relativas a la transparencia aplicables a esos métodos no eran enteramente compatibles ni viables. Algunas de las condiciones en cuestión también podían justificar el uso de la contratación con un solo proveedor, que es el método menos beneficioso porque elimina por completo la competencia. El Grupo de Trabajo decidió reformular las disposiciones para exigir a la entidad adjudicadora que utilice el método más competitivo posible, de modo que la contratación con un solo proveedor se permitiría únicamente en casos urgentes. Así pues, la convocatoria internacional abierta a licitación debería aplicarse con carácter prioritario, a menos que se justificara la licitación restringida o nacional. Las disposiciones reformuladas tendrán que acordarse definitivamente una vez que se hayan ultimado los diversos métodos de contratación y sus aplicaciones normales.

18. Aunque el Grupo de Trabajo convino en simplificar y racionalizar la Ley Modelo eliminando las repeticiones, las contradicciones y las disposiciones innecesariamente detalladas, los indicios actuales son que quizá haya más métodos que anteriormente, y se invita a la Comisión a que estudie el modo de tratar esa situación.

19. Para fomentar la simplificación y un régimen jurídico armonizado en el marco de la Ley Modelo, el Grupo de Trabajo acordó eliminar las exenciones generales de las contrataciones en los sectores de la defensa y la seguridad nacionales, pues no todas ellas son confidenciales. No obstante, dado que algunas contrataciones en el sector de la defensa pueden ser altamente confidenciales, tal vez deba permitirse mantener la confidencialidad mediante la suspensión de algunos requisitos de transparencia.

20. Los procedimientos de licitación se abordaron en el texto de 1994 de manera mucho más detallada que otros métodos de contratación. Puesto que muchas de las normas aplicables a los procedimientos de licitación son de aplicación general, el Grupo de Trabajo combinó todos esos principios y procedimientos en el capítulo I de la Ley Modelo revisada. Entre ellos figuran los enumerados a continuación: normas usuales sobre la elección del método de contratación y la licitación abierta o directa; descripción de la contratación; criterios de evaluación; recurso opcional a las garantías de las ofertas en todos los métodos de contratación; procedimientos previos a la cualificación; confidencialidad, y aceptación de una oferta y entrada en vigor del contrato adjudicado.

21. Se invita a la Comisión a que considere si el capítulo I debería incluir otras disposiciones relativas, por ejemplo, a las solicitudes de manifestaciones de

interés y las reglas generales sobre aclaraciones y modificaciones durante el proceso de contratación.

22. En el proyecto de Ley Modelo revisada ya no se distingue entre métodos de contratación de bienes u obras, por una parte, y de servicios, por otra. Ahora el enfoque se centra en la complejidad o sencillez, o bien en identificar y evaluar lo que debe contratarse. Si pueden formularse especificaciones o características al inicio del proceso y evaluarse en función de criterios cuantificables y transparentes, no es necesario que en la contratación se recurra a negociaciones. Además del método normal de licitación, los métodos pertinentes son la licitación abierta o restringida (sistema de un sobre), la solicitud de propuestas abierta o restringida sin negociación (sistema de dos sobres), una solicitud de cotizaciones o un procedimiento de subasta electrónica inversa. En el otro extremo del espectro, cuando las especificaciones o características no pueden evaluarse mediante criterios cuantificables, los métodos de contratación incluirían negociaciones como el diálogo competitivo. Si bien se está adoptando un criterio ligeramente diferente para la determinación de los métodos de contratación, los principios básicos de 1994 no cambiarían: la licitación sería el método empleado con carácter sustitutivo y las condiciones para el uso de la contratación con un único proveedor seguirían siendo estrictas.

23. El Grupo de Trabajo también formuló un único conjunto de requisitos para la evaluación y comparación de las ofertas. En el proyecto de artículo 12 se requiere que esos requisitos sean de interés para el objeto de la contratación y, en la medida de lo posible, objetivos y cuantificables. Deben divulgarse al principio del proceso de contratación junto con cualesquiera márgenes de preferencia, ponderaciones relativas, límites y el modo en que estos últimos se aplicarían. El Grupo de Trabajo convino en los principios, pero los detalles todavía no se han ultimado.

24. El Grupo de Trabajo indicó que examinaría el modo en que el uso de la contratación para fomentar políticas industriales, sociales y ambientales se trataba en la Ley Modelo, por ejemplo, dando orientación adicional sobre el modo de aumentar la transparencia y la objetividad. Esas cuestiones se abordaban en el documento A/CN.9/WG.I/XV/CRP.2. Puesto que el objetivo en muchos casos es permitir que el Estado promulgante proteja su economía nacional, la entidad adjudicadora podría tener en cuenta factores no objetivos a la hora de decidir la oferta ganadora. Se invitará a la Comisión a que considere la posibilidad de fundir algunas disposiciones de la Ley Modelo. Una cuestión especialmente importante es la de si todos los factores socioeconómicos deberían tratarse como criterios de evaluación.

25. En algunos sistemas, como el Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial del Comercio, se consideran los criterios socioeconómicos como cuestiones de cualificación, es decir, como condiciones de admisibilidad para la participación. Tras algunas consultas oficiosas, se ha constatado escaso apoyo a esa idea, particularmente en el contexto de una disposición incluida en el proyecto de Ley Modelo revisada que permitiera excluir a la competencia extranjera de un proceso de contratación nacional en determinadas circunstancias. Algunos sistemas nacionales incluyen cuotas para minorías que podrían influir en la competencia.

26. En la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción se exige que los sistemas de contratación cuenten con un sistema eficaz de examen interno para garantizar la disponibilidad de vías de recurso. Las disposiciones sobre reconsideración de la Ley Modelo de 1994 son de aplicación optativa, administrativas y limitadas, y en ellas no hay disposición alguna acerca de la independencia de la reconsideración. El Grupo de Trabajo considera que esas disposiciones no son suficientemente sólidas para cumplir lo dispuesto en la Convención contra la Corrupción, y recomienda, entre otras cosas, que sean obligatorias, que se elimine la lista de excepciones y que toda decisión relativa al método de contratación esté abierta a impugnaciones. El Grupo de Trabajo también recomienda que se introduzca un período de suspensión antes de la entrada en vigor del contrato, lo suficientemente largo para que el procedimiento de reconsideración pueda ser eficaz. Todavía no se han ultimado las medidas de exención en los casos en que surgiera un problema, y las disposiciones al respecto del Acuerdo sobre Contratación Pública parecen diferir de las del texto de la Ley Modelo de 1994.

27. Las cuestiones que suscita la participación comunitaria en la contratación se refieren, sobre todo, a las fases de planificación y ejecución de un proyecto. Dada la importancia cada vez mayor de esa participación y teniendo en cuenta que tal vez sea necesario promulgar legislación para permitirla, se han revisado las disposiciones de la Ley Modelo para garantizar que ello no sea un obstáculo a la inclusión de una disposición relativa a la participación comunitaria en la contratación relacionada con proyectos. En la Guía para la incorporación al derecho interno se dará una mayor orientación al respecto.

28. La Ley Modelo permite a las entidades adjudicadoras exigir la legalización de los documentos de todos los participantes, lo cual podría llevar tiempo y resultar costoso para los proveedores. Además del efecto disuasorio de dicho requisito, el incremento de una parte o de la totalidad de los gastos generales ocasionados al proveedor podría transferirse a la

entidad adjudicadora. De ahí que el Grupo de Trabajo recomiende que se enmienden las disposiciones de la Ley Modelo para que la entidad adjudicadora pueda exigir la legalización de la documentación únicamente al proveedor con la oferta ganadora.

29. Finalmente, en relación con los conflictos de interés, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción exige a los Estados promulgantes que, cuando proceda, adopten medidas para reglamentar las cuestiones relativas al personal encargado de la contratación pública, en particular, declaraciones de interés respecto de determinadas contrataciones públicas, procedimientos de preselección y requisitos de capacitación. En la Ley Modelo de 1994 no existen disposiciones equivalentes, y el Grupo de Trabajo considera que el texto revisado debería incluir una referencia adecuada al respecto.

30. La Secretaría entiende que la Comisión tal vez desee considerar la posibilidad de establecer un comité plenario para estudiar en detalle el texto revisado.

31. El **Sr. Marca Paco** (Estado Plurinacional de Bolivia) pregunta si las disposiciones del proyecto de Ley Modelo revisada permitirían a un gobierno la contratación con un único proveedor como medio de ampliar la inversión pública y fomentar el crecimiento y la eficiencia en determinados sectores económicos, tales como los municipios y las comunidades locales. Si bien el valor monetario de ese tipo de contratación no es muy elevado en términos absolutos, las oportunidades económicas que ofrece son de gran importancia para los sectores en cuestión. Cuando el objetivo es ofrecer un beneficio inmediato a un sector determinado, los procedimientos habituales de contratación llevan demasiado tiempo. Su delegación espera que esas consideraciones se puedan reflejar en el proyecto de Ley Modelo revisada para que se pueda recurrir a ciertas categorías de proveedores con más frecuencia a fin de lograr objetivos concretos de política social.

32. La **Sra. Nicholas** (Secretaría) dice que en el proyecto de artículo 7 se establecen las condiciones que se deben cumplir cuando una entidad adjudicadora desea recurrir a la contratación con un único proveedor. Siempre y cuando se respeten las condiciones establecidas en ese artículo, y una de esas condiciones es que la entidad adjudicadora debe hacer un anuncio público y ofrecer oportunidades suficientes para que se formulen observaciones, se podrá contratar con un solo proveedor para fomentar las políticas socioeconómicas mencionadas en otras partes del proyecto de Ley Modelo revisada. Por tanto, en teoría, un objetivo socioeconómico como la inversión pública quedaría dentro del ámbito de ese artículo. La cuestión podrá tratarse con más detalle cuando el comité plenario examine el documento A/CN.9/WG.I/XV/CRP.2.

Se suspende la sesión a las 11 y se reanuda a las 11.40 horas.

33. **El Presidente** invita a la Comisión a que formule observaciones sobre la propuesta de ampliar el mandato del Grupo de Trabajo I para que incluya consideraciones socioeconómicas y la exención del sector de la defensa.

34. El **Sr. Frühmann** (Austria) dice que su delegación apoya la propuesta.

35. El **Sr. Ekedede** (Nigeria) dice que su delegación apoya la inclusión de aspectos socioeconómicos en el mandato del Grupo de Trabajo. Entiende que esos aspectos engloban los conceptos de mejor rendimiento del dinero, transparencia, flexibilidad y rendición de cuentas. La contratación de bienes, obras y servicios es de importancia primordial para los países en desarrollo, en los que frecuentemente le corresponde más del 50% del presupuesto. También es una esfera plagada de prácticas poco convencionales, por no decir corruptas. El fin de la Ley Modelo es proporcionar orientación a los países en desarrollo y fomentar la aplicación de mejores prácticas. Sus disposiciones deben velar por los proveedores nacionales de los países en desarrollo protegiéndolos de la competencia indebida.

36. **El Presidente** dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión aprueba la inclusión de

consideraciones socioeconómicas y la exención del sector de la defensa en el mandato del Grupo de Trabajo.

37. *Así queda acordado.*

38. **El Presidente** dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión desea establecer un comité plenario para que haga una segunda lectura del proyecto de Ley Modelo revisada sobre contratación.

39. *Así queda acordado.*

40. **El Presidente** invita a la Comisión a que proceda a elegir un Presidente del Comité Plenario.

41. El **Sr. Frühmann** (Austria) propone la candidatura de la Sra. Blanchard (Canadá) para el cargo de Presidenta del Comité Plenario.

42. El **Sr. Denison Cross** (Reino Unido) y la **Sra. Smejkalová** (República Checa) apoyan la candidatura.

43. *La Sra. Blanchard (Canadá) es elegida Presidenta por aclamación.*

44. **El Presidente** dice que el Comité Plenario se reunirá inmediatamente después de que se levante la sesión de la Comisión, para iniciar la segunda lectura del texto de la Ley Modelo revisada.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.